



LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El 70% del fondo de 16.000 millones se invertirá en sanidad y educación

Comunidades del PP y del PSOE protestan por los nuevos criterios para el reparto

JOSÉ MARCOS, Madrid
A dos semanas de que finalice el estado de alarma, el Gobierno ultima las condiciones del fondo de 16.000 millones no reembolsables destinado a las comunidades autónomas.

El Gobierno pone como condición que 11.000 de esos millones (el 68,75%) de una inyección de recursos sin precedentes se inviertan en sanidad (9.000) y educación (2.000). El resto irá a paliar la caída de ingresos por el desplome de la economía. Seis presidentes autonómicos de diferentes partidos cuestionaron ayer los criterios de reparto, que incluyen como novedad, además de la partida para educación, otra de 800 millones para transporte.

me de la economía. Seis presidentes autonómicos de diferentes partidos cuestionaron ayer los criterios de reparto, que incluyen como novedad, además de la partida para educación, otra de 800 millones para transporte.

Para poner en perspectiva el tamaño del fondo, Sánchez destacó que equivale a más del triple del presupuesto anual de ministerios como Educación y Sanidad, al doble del destinado a infraestructuras o al triple del que se dedica a seguridad ciudadana. "El esfuerzo que está mostrando el Gobierno, sobre todo para defender la sanidad y la educación públicas cuando en septiembre ya tengamos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio, me parece definitivo", sentenció.

La intención del Gobierno es aprobar los términos del fondo en el Consejo de Ministros del próximo día 16, cinco días antes del final del estado de alarma, mediante un decreto que se someterá a la aprobación del Congreso. Una decisión en la que los barones de cada partido, sean socialistas o populares, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo: los hay más interesados en que prevalezca el criterio de la población, como venía pidiendo la Comunidad Valenciana (PSOE), y otros que

Con 72 fallecidos por coronavirus en la última semana, lejísimos de los 950 decesos diarios que llegó a haber en abril, la recuperación económica se ha convertido en la prioridad de La Moncloa y las comunidades autónomas. Un contexto en el que el fondo de 16.000 millones, anunciado el 2 de mayo, gana relevancia conforme se aproxima el final de la desescalada. Tanto que su reparto llega a enfrentar entre sí a las comunidades del PSOE. Y a las del PP. Los presidentes de Cataluña, Galicia, las dos Castillas, Aragón y Cantabria mostraron serios reparos a la propuesta del Gobierno, durante la conferencia celebrada ayer con Pedro Sánchez.

"El Fondo Covid-19 supone la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómico", destacó Sánchez tras escuchar las críticas de varios territorios por los cambios en el sistema de reparto. "Es difícil encontrar un mínimo común denominador", reconoció el presidente al final de la cumbre, según fuentes presentes. Con la nueva distribución se destinarán 9.000 millones a cubrir el incremento de la inversión sanitaria, 2.000 a educación y 5.000 a la caída de ingresos, de los que se detraen 800 para un nuevo fondo de transportes que compensará el descenso de la facturación de las empresas públicas en metro, cercanías o autobuses interurbanos. La idea original del Gobierno, matizada ahora, era que 10.000 millones fueran para compensar los gastos extraordinarios en sanidad, otros 1.000 para gastos sociales y 5.000 más para fomentar la recuperación económica. "Hablamos de

Andalucía pide vetar el Paso del Estrecho

El jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no autorice la Operación Paso del Estrecho (OPE), que cada verano aglutina en los principales puertos de la comunidad a más de tres millones de viajeros procedentes de Europa —Francia, Bélgica y Países Bajos, principalmente— con destino al norte de África.

El dirigente del PP entiende que no se dan "las circunstancias ideales" para realizarla con los controles y medidas de higiene que demanda la pandemia y ha exigido a Sánchez que, si se realiza, se haga "de manera ordenada, muy planificada y con la máxima seguridad".

El Gobierno de España es consciente de la complejidad que este año entraña la organización del mayor movimiento de personas que se produce entre Europa y África y por eso ya ha comenzado con reuniones técnicas y ha enablado contactos con otros Estados implicados. "Estamos trabajando en la eventualidad de que se produzca y hablando con otros Gobiernos y con Marruecos", dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior a la videoconferencia con los mandatarios autonómicos. / E. SAIZ

transferencias directas, no de préstamos. Por tanto, las comunidades no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda, ni les generará intereses de ningún tipo. Esta es una entrega definitiva", insistió Sánchez.

El fondo se repartirá en cuatro tramos hasta diciembre. Se empezará con 6.000 millones en junio en función de criterios represen-

tativos del gasto sanitario de cada territorio. Otros 3.000 con el mismo propósito se concederán en noviembre. Para gastos educativos se reservan 2.000 en septiembre, coincidiendo con el regreso a las aulas. En diciembre se darán 5.000 millones —incluido el fondo de transporte— para paliar la merma de ingresos por la caída de la actividad económica.





LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

exigen que se refuerce la partida para los gastos sanitarios ocasionados por el coronavirus, como Castilla-La Mancha y Aragón (PSOE) o Castilla y León (PP). Ante la contrariedad de algunos líderes territoriales, el presidente destacó que, dentro de las áreas de gasto fijadas por el Gobierno, las comunidades podrán decidir el destino del dinero sin rendir cuentas al Ejecutivo central. “Lo harán a los ciudadanos a través de sus respectivos Parlamentos autonómicos”, apostilló. Alberto Núñez Feijóo (PP) pidió libertad para destinar a otros fines la parte de educación. El presidente gallego se quejó de la supresión de la bolsa de 1.000 millones destinada a otros gastos sociales.

La inquietud de algunas de las autonomías más afectadas por la covid-19, sobre todo del interior, es que se reduzca en 1.000 millones la partida para cubrir los gastos sanitarios. De esa reducción y de la prevista para otros gastos sociales, saldrán los 2.000 millones para educación. Tampoco

convenció a las comunidades más rurales que el fondo para transporte se reste de los 5.000 millones destinados a compensar la caída de ingresos, ya que entienden que solo favorece a las grandes áreas urbanas.

Población y transporte

Distinta, en este punto, es la visión de las comunidades más pobladas y con potentes sistemas de transporte público, como Madrid y Cataluña —las dos con mayor número de víctimas— o Andalucía. Ni la madrileña Isabel Díaz Ayuso ni el andaluz Juan Manuel Moreno, ambos del PP, se alarmaron por los nuevos criterios. Quim Torra sí protestó contra “los vaivenes” del Ejecutivo. El *president* considera que los nuevos criterios suponen para Cataluña una pérdida de “decenas de millones de euros” que no concretó. Y exigió un fondo para el transporte con “el doble o el triple” de la cantidad prevista, informa **Pere Ríos**. Torra reclama 15.000 millones de euros

de inmediato “para no ahogar a Cataluña”.

La España vacía concentró las críticas al Gobierno. El nuevo modelo “deja en la estacada a las comunidades que más han sufrido la pandemia”, afirmó tras la conferencia Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de Castilla y León cree que no se tiene en cuenta la incidencia de la pandemia en la comunidad más extensa y con la densidad de población más baja (25 habitantes por kilómetro cuadrado) junto a Castilla-La Mancha. “Este es un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad, no con otros criterios. Y tanto La Rioja, Castilla y León o Castilla-La Mancha hemos tenido porcentualmente más impacto y hemos tenido que dejarnos la piel en gasto de material y contrataciones”, discrepó el socialista Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha llegó a expresar su temor a que el dinero para la educación vaya al sector privado y perjudique a comunidades como la suya, “con una consolidada red pública”. Sánchez dispuso esos temores en su comparecencia posterior en La Moncloa y aseguró que todo el dinero será para la pública.

Otro socialista, el aragonés Javier Lambán, puso el acento en el coste de garantizar la educación en las zonas rurales, donde las plazas “cuestan tres o cuatro veces más” que en las ciudades. Y pidió reconsiderar la anulación de la partida prevista para otras políticas sociales. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, expresó su “profundo malestar” al entender que se prima más a la población en detrimento del coste del servicio.

Otros presidentes regionales consultados no comparten los reproches y vinculan la desaparición del fondo social a la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Dotado de 3.000 millones, el 26 de junio lo empezarán a cobrar 255.000 beneficiarios. “Entiendo que los presidentes autonómicos quieren más, más y más. Pero el Gobierno está haciendo una transferencia sin precedentes en la historia de la democracia”, zanjó Sánchez.



Pedro Sánchez, durante su comparecencia ayer en La Moncloa. / JAIME VILLANUEVA